

RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS CONTENIDAS EN EL INFORME
SOBRE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA

M.^a Jesús Sainz García

Secretaria Tercera de la Mesa
del Congreso de los Diputados.
Portavoz del Grupo Popular en la
Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer

RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONTENIDAS EN EL INFORME SOBRE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

La violencia de género es una dura realidad que destruye la vida de numerosas mujeres cada año, socava la convivencia y constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y, por ello, un atentado contra la dignidad, libertad, seguridad y derecho a la vida.

Es un grave problema de nuestra sociedad, con hondas raíces estructurales ya que es la expresión de un orden social basado en la desigualdad real, en una concepción patriarcal que es preciso eliminar de la sociedad. Y para el Partido Popular es, sin duda, un objetivo prioritario.

Y conocemos que sólo con un cambio de mentalidades, con una educación en valores de igualdad y de respeto conseguiremos superar, definitivamente esta agresión que se produce contra la mitad de la población que constituyen las mujeres.

Han pasado los tiempos en que el problema era considerado privado para constituir un problema social de primera magnitud y situarse en la agenda del trabajo parlamentario y como una prioridad del Gobierno. Que la lucha contra la violencia de género constituye un eje básico de la política social lo evidencian los dos planes integrales elaborados por el Gobierno y las reformas que en el terreno legislativo se han llevado a cabo.

Y así, el 22 de octubre de 2002 en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, se creó una subcomisión con el objetivo

de formular medidas legislativas encaminadas a dar una respuesta integral frente a este tipo de violencia.

Conclusiones que fueron aprobadas, por unanimidad, en Comisión el 24 de marzo pasado y que contienen importantes propuestas en el ámbito penal y procesal, policial, educativo, sanitario, y de protección y asistencia social, y por supuesto económicas.

Y entre las conclusiones más relevantes está la Orden de Protección que puso sobre la mesa para su estudio el Ministro Sr. Michavila y que se elaboró con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, y con el diálogo y el consenso de todos los grupos parlamentarios que ayer aprobamos, precisamente, una Proposición de Ley que regula esta Orden.

Todos somos conscientes de las especiales características que rodean estos delitos.

La relación afectiva entre el agresor y la víctima (amor-odio). La dependencia económica, la existencia de unos hijos comunes y de un domicilio compartido.

Lazos que son barreras con las que las mujeres se encuentran ante los malos tratos. Y por ello era necesario articular un instrumento que fuera lo más eficaz posible para abordar toda la complejidad, dificultades y riesgos en los que se ven envueltas las mujeres víctimas.

Y desde esa complejidad se articuló la Orden de Protección, construida, como hemos dicho, desde el consenso y que tiene un carácter integral, ya que se ha articulado para que dé una respuesta coordinada de todas las administraciones y, se unan, las actuaciones de las jurisdicciones penal y civil con el fin de que la protección sea más segura, y más inmediata. En el plazo de 24 a 72 horas, el juez de guardia deberá adoptar medidas que constituirán un estatuto integral de protección a las víctimas.

Integral porque en ella se articulan las medidas como decimos, de orden penal, civil, asistencial, protección social y económica.

Se supera la actual dispersión para mejor proteger y de forma inmediata a la víctima. Destacamos que se incorporan medidas que supondrán restricción de movimientos para el agresor, fundamentales para impedir la aproximación a la víctima y dar la mejor

respuesta a esa evidente situación de riesgo (prisión provisional, prohibición de acercarse a la víctima, inhabilitación de la patria potestad, etc.). Medidas cautelares que se aplicarán no sólo en casos de delito sino también de faltas.

Se incorporarán, como decíamos, también, medidas civiles (atribución de la vivienda, determinación de régimen de custodia, visita y estancia con los hijos). Todas ellas orientadas a producir seguridad, estabilidad y protección jurídica a las personas agredidas y a sus familiares sin esperar a formalizar el proceso matrimonial civil.

Me gustaría resaltar que por su carácter integral, la Orden ha de servir también como título judicial acreditativo para la obtención de todos los beneficios de protección de índole social, asistencial y económico, como son el nuevo Fondo de Alimentos que nacerá en colaboración con las Comunidades Autónomas para hacer frente a los impagos de las pensiones alimenticias asignadas, y el acceso inmediato a la Renta Activa de Inserción a la que se ha comprometido el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para su aplicación inmediata. Medidas de gran trascendencia por constituir un elemento fundamental para que las mujeres se sientan mucho más seguras en el momento de decidirse a denunciar, ya que en muchos casos tienen dependencia económica del agresor, aún después de haber sido agredidas, lo que en muchas ocasiones las retrae y las frena a denunciar las agresiones. A partir de ahora, las mujeres víctimas de estas agresiones sin recursos o con recursos muy bajos, tendrán derecho a un salario superior a 300 euros al mes durante diez meses, ello sin perjuicio, por supuesto, de aplicación de todas las medidas de inserción y búsqueda de empleo a que tengan derecho.

La Orden Judicial de Protección supondrá que las distintas Administraciones Públicas, la estatal, la autonómica y la local activarán de inmediato los instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. Elemento éste innovador y muy importante. Todos hemos creído que ésta es la mejor iniciativa posible que podíamos articular. Desde esa conciencia la aprobamos y la hemos construido desde el diálogo, el

acuerdo y el consenso. Pueden creerme que la hemos articulado desde un único compromiso, el que tenemos con las mujeres víctimas de esta lacra social.

La Orden de Protección se construye sobre otras importantes reformas que se han venido realizando desde el Ministerio de Justicia, prisión provisional, juicios rápidos o importantes modificaciones legales que a través de los proyectos de reforma del Código penal en tramitación en el Parlamento se van a producir, en línea con las propuestas, a las que antes me refería, recogidas en el Informe de la Subcomisión que ya he mencionado. Sinceramente, creemos que todo ello puede suponer un cambio cualitativo en la respuesta que todo el ordenamiento penal y procesal va a dar a la protección de las mujeres víctimas. Nuestro deseo es que sea adecuado a las especiales características que este tipo de delitos tiene, que sea contundente con al agresor, pero sobre todo, esperamos que sea eficaz en la protección de las mujeres.

Les puedo asegurar que desde el Grupo Popular lo único que, una vez más, hemos tenido presente, es ese compromiso con lo que yo siempre digo que es la causa más justa de la democracia: la igualdad. Y, consecuentemente, nuestro empeño para proteger a las mujeres más débiles víctimas de esa desigualdad que son las mujeres maltratadas. Lacra que es incompatible con una sociedad libre y democrática como la española.